

La actividad informativa del Gobierno español durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, COVID-19

The Spanish Government informative activity during the health emergency induced by coronaviruses, COVID-19

Ángel Ibáñez Peiró^a

^a Grupo de investigación Mediación Dialéctica de la Comunicación Social (MDCS), Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid, España

Resumen

El impacto social que está produciendo la epidemia del llamado COVID-19 en todo el mundo y los efectos que se derivaran de ello, en la actualidad, son difíciles de cuantificar. Aunque no es el momento de hacer un balance sobre la respuesta que está dando el Gobierno español a la emergencia sanitaria, sí se puede proceder a una primera valoración de la forma en que está gestionando la labor informativa durante los cuatro primeros meses del año. Para ello, en este trabajo se exponen las pautas legales que la Administración debe observar en el ejercicio de la función pública de informar, tanto en situaciones de normalidad como en la emergencia sanitaria que vivimos provocada por el denominado coronavirus. Mediante estos parámetros de carácter técnico-legal, el análisis del tipo de información difundida, de los portavoces oficiales y de la implicación del Gobierno con los medios de comunicación a través de la financiación pública, se ha elaborado un bosquejo bastante nítido con el cual se puede enjuiciar desde parámetros objetivos la respuesta comunicacional dada hasta el momento.

Palabras clave: Información Pública; coronavirus; epidemias y comunicación; COVID-19.

Abstract

The social impact produced by so-called COVID-19 epidemic all over the world, and its derived effects, is difficult to quantify currently. Although this is not time to come to a final and optimistic conclusion about the Spanish Government response to this health emergency, we can reach a first one, about the way it has established for managing its information policy during the current year first months. For reaching that goal, this paper sets out the legal guidelines the Public Administration must observe in the exercise of the public function of reporting, both in normal situations and in health emergencies like we are living now, caused by the so-called coronavirus. Through these technical-legal frameworks, the analysis of the type of information disseminated, the official spokespersons role and of the Government relation with the media through public financing, we have drawn up a fairly sharp sketch suitable for assessing, with objective parameters, the communicational response produced so far.

Key Words: Public Information; coronaviruses; epidemics and communication; COVID-19.

Introducción

Para el Estado –en todas sus ramas y escalones, así como las demás entidades integrantes del sector público estatal– la labor informativa a la población es una función pública más a la que tiene que dar obligado cumplimiento, por ser un derecho humano y una herramienta que le permite al ciudadano su mejor participación en la vida democrática de la sociedad.

La gestión de esta labor informativa debe ser uno de los ejes primordiales para que sean conocidas todas las acciones que desarrolle la Administración, con el objetivo de responder a las inquietudes de una sociedad crítica y exigente, que desea participar junto a los poderes públicos en las labores de gobernanza. De esta forma, difundiendo determinada información sin que lo soliciten los administrados, la llamada publicidad activa del Estado, se incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública según se dispone en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; tarea que al ser desempeñada por los diferentes entes públicos con personal al servicio de las Administraciones públicas se convierte en la llamada función pública de informar. El Tribunal de cuentas, en su informe nº 904 de 2011, la define como aquella actividad que, ordenada y orientada a la difusión de un mensaje común y veraz, ajeno a la mera opinión política, persigue dar a conocer a los ciudadanos los servicios que presta y las actividades que desarrolla la Administración.

Por otra parte, la información a la población en situaciones extraordinarias o de emergencia constituye una herramienta imprescindible para la seguridad y aumento de la resiliencia de las personas afectadas. Independientemente de la fortaleza logística y del conjunto de medios materiales y humanos disponibles con los que dar respuesta a situaciones calamitosas en países desarrollados como EE.UU.¹, la actividad comunicativa adquiere tal importancia que conforma uno de los tres pilares en que se basa la respuesta a las catástrofes o emergencias graves, a saber:

- El mando único. En España este concepto, así como sus particularidades, ya se encontraba recogido en las medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. (R.D. 1378, 1985, Art. 8).

- Un sistema de comunicación y transmisión de datos que posibilite una ágil acción de Mando y Control en la respuesta, fundamentado en el empleo

de las nuevas tecnologías que ofrecen la informática y la telecomunicación. Para estos acaecimientos España dispone de una amplísima gama de medios tecnológicos (La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, 2008, p. 16).

- Una adecuada gestión de la información a la población y a los medios de comunicación social basada en un Plan de comunicación de emergencia, según se determina en la ley del Sistema Nacional de Protección Civil al tratar sobre la política de prevención. (Ley 17, 2015, art. 10).

Ante la posibilidad de que surja una catástrofe o una emergencia grave, como es la producida por el denominado coronavirus COVID-19, en España está perfectamente regulada la forma de gestionar la información a la población. Para ello se dispone de un amplio y variado conjunto de medios y plataformas coordinadas por el Ministerio de la Presidencia.

Esta función pública de informar suele verse alterada, cuando no corrompida, por la gestión política de la respuesta a la crisis o la epidemia de turno. El resultado suele ser que la población y los técnicos concernidos en los trabajos de mitigación y respuesta arriesgan, o pierden, sus vidas ante la mayor imperturbabilidad moral de la mayoría de sus gobernantes, los cuales suelen utilizar la función pública de informar en beneficio de sus espurios intereses.

Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es analizar la gestión de la actividad comunicativa por parte del Gobierno español con motivo de la emergencia provocada por el coronavirus COVID-19 durante los cuatro primeros meses del año 2020. En ningún momento se pretende enjuiciar la forma en que el Ejecutivo está dirigiendo la respuesta técnica a la emergencia sanitaria. Sobre todo, teniendo en cuenta que muy posiblemente sean los Tribunales de Justicia quienes lo determinen.

En este contexto, el trabajo se ha dividido en dos partes. En la primera se ha abordado el asunto desde los tres aspectos principales en que se encuentra inmersa la función pública de informar, al tiempo que se van ofreciendo ejemplos periodísticos para ilustrarlos. Estos aspectos son: la normativa que regula la información del Estado, su utilización como herramienta que aumenta la seguridad y la resiliencia en la sociedad mediante la ingeniería social, y las repercusiones económicas que produce este bien público –como es la información– entre los medios de comunicación privados. Con ello se persigue alcanzar un objetivo secundario: dar al lector la

¹ Como consecuencia del huracán Katrina, EE. UU. ya lo contemplaba veinte años atrás en su Sistema de Comando de Incidentes. (Federal Emergency Management Agency [FEMA], 2010).

apoyatura técnica imprescindible para que pueda obtener sin dificultad sus propias conclusiones. En la segunda parte, como caso práctico, se analiza la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

El caso práctico se ha basado en el análisis de los siguientes puntos: 1) Conocer y evaluar a la autoridad –o autoridades– gestoras de la información, así como a sus portavoces, y 2) Evaluación de información emitida por el Gobierno y por los medios de comunicación entre los meses de enero y abril.

Para conseguir las metas propuestas y con la finalidad de complementar e ilustrar este estudio, se han utilizado como apoyatura tres estudios de mayor alcance y envergadura –hechos por el autor– desde los que se contempla de forma integral la gestión de la Información Pública en situaciones extraordinarias como catástrofes, emergencias o crisis relacionadas con la salud (Ibáñez, 2014; Ibáñez, 2017; Ibáñez, 2019), con lo cual se puede entender que este trabajo es una prolongación de las investigaciones aludidas.

Metodología

Aunque el método que se ha seguido es similar al empleado en los trabajos señalados, para facilitar su comprensión, a continuación se exponen ciertos detalles fundamentales de este:

- Se ha estudiado, en materia de comunicación, la legislación de la Administración General del Estado ya que la gestión de la crisis del COVID-19 está siendo realizada por el Gobierno.

- Se ha utilizado todo lo publicado por la agencia de noticias Europa Press sobre la crisis del virus del COVID-19 durante los cuatro primeros meses del año.

- Se han monitorizado y utilizado de forma aleatoria las noticias de publicaciones periódicas digitales por entender que algunas suelen formar parte del conjunto de medios de comunicación más críticos con la gestión gubernamental de la emergencia sanitaria al ser, normalmente, las que menos ayudas económicas suelen recibir del Gobierno de turno. Los titulares de algunas de estas noticias se han incluido en el texto, o insertado a pie de página, como ejemplos ilustrativos.

- En lo que respecta a datos cuantitativos, se han recopilado las notas de prensa difundidas por el Ministerio de Sanidad. También el número de videos de las ruedas de prensa que han realizado el presidente del Gobierno, los ministros y sus portavoces.

- Al no haber concluido la emergencia sanitaria, se ha hecho un somero análisis técnico del evento teniendo en cuenta datos relativos a los portavoces y autoridades de

las instituciones ministeriales que intervinieron, así como sus repercusiones comunicacionales.

Por último, conviene aclarar que no se va a tratar el papel ejercido por las redes sociales debido a que, por un lado, estas plataformas digitales están sometidas a ciertas presiones más relacionadas con la ingeniería político-social que con la información a la población y, por otro, que las características de este trabajo no permiten tratar el asunto con la profundidad y rigor debido. No obstante, para conocimiento del lector, existe un trabajo con el que se puede paliar esta carencia titulado: “Uso de las redes sociales en la cobertura periodística de crisis, desastres y emergencias en España” (Mayo, 2019).

Resultados y discusión

Primera parte: la Información de la Administración sus condicionantes

La función pública de informar se ejerce desde unos parámetros determinados por el ordenamiento jurídico. Así, la Administración está obligada a difundir: “de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública” (Ley 19, 2013, art. 5). Por ello está llamada a convertirse en el principal agente informador en acontecimientos extraordinarios que puedan afectar a la comunidad, en base a las dificultades que suelen encontrar los informadores privados en este tipo de circunstancias y la gran cantidad de datos, medios materiales y humanos que dispone el Estado para darles respuesta.

La labor informativa de la Administración se distingue de la llamada información periodística por la forma en que se debe gestionar, por los imperativos legales a que está sometida y, esencialmente, porque al desempeñar el Estado esta labor se debe garantizar a la ciudadanía ciertos derechos y libertades amparados en la Constitución. Todo lo cual hace que la información/comunicación del Estado sea una realidad única, motivo por el cual, en lo sucesivo, se expresará con mayúsculas: Información/Comunicación Pública.

Las definiciones que ofrece el ordenamiento jurídico sobre los términos información y comunicación pública, no se corresponden con la función informativa del Estado respecto a la difusión de las actividades que realiza entre la ciudadanía. Para mayor desconcierto, el ordenamiento jurídico utiliza estos dos términos de forma indistinta sin diferenciarlos, motivo por el que en este trabajo se utiliza un término u otro respetando lo que disponga la legislación en cada momento. De cualquier manera para orientar al lector que no esté familiarizado con estos conceptos,

de forma simplificada, diremos que, en el campo de las crisis y la emergencia, la comunicación es la información que ha llegado al público destinatario para el que fue elaborada y ha causado los efectos pretendidos, o sea, la información se convierte en comunicación cuando es “aprovechada” por el público a que va dirigida. De este modo, se puede afirmar que, la comunicación pública es la información pública que ha alcanzado el más alto grado de efectividad por haber conseguido el objetivo que persigue (Ibañez, 2014).

Los tres aspectos más destacables de esa realidad única a la que nos referimos y que más condicionan a la Administración son: el ámbito legal en que se desarrolla (la legalidad vigente); su utilización como instrumento modelador de la sociedad (la ingeniería social); y que la Información Pública es un bien público que genera una gran actividad económica. Aunque pueden parecer inconexos se condicionan mutuamente, y para poder vislumbrar mínimamente lo que entrañan estas afirmaciones, sin profundizar en ello, es conveniente hacer un bosquejo general del asunto.

Información Pública y la legalidad vigente

En general, el derecho a la información en España se encuentra amparado por los artículos 18, 20, y 55 de la Constitución, el ordenamiento jurídico cuenta con una amplia panoplia de disposiciones legales desde las que se determina con precisión los límites de cada uno de los derechos constitucionales implicados en los diversos tipos de información y que se pueden resumir en los siguientes: el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; a la libertad de expresión e información; el derecho que asiste al paciente a no ser informado sobre la dolencia que padezca (Ley 41, 2002, art. 4); el derecho a la información de las actividades realizadas por la Administración, sean generales o particulares, respecto a intereses y derechos de cualquier persona, el derecho de acceso a la información pública (Ley 19, 2013, art. 12); o estar informado de los riesgos colectivos importantes que le afecten (Ley 33, 2011, art. 10). Con respecto a este último derecho, es necesario resaltar que, posiblemente, la Unión Europea (UE) incumplió esta obligación, según se denunció en algunos medios de comunicación con titulares como este: “La UE reconoce que aceptó que China censurara un artículo sobre el origen del coronavirus” (OKDIARIO, 2020).

Estos derechos, en periodos de normalidad, solamente se verán limitados por la propia naturaleza de la información –según se dispone en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses

protegidos (Ley 19, 2013, preámbulo). No ocurre lo mismo cuando la sociedad se encuentra inmersa en situaciones extraordinarias. En casos que amenacen riesgo para la integridad física de las personas la información, como derecho y como deber, necesariamente quedará subordinada a los derechos humanos fundamentales, principalmente el derecho a la vida. Así, cuando está en peligro la vida humana, los poderes públicos deben exigir a los medios de comunicación y a los informadores, sobre todo en las redes sociales, que actúen con extrema cautela y con las limitaciones éticas propias de un acontecimiento resultado de una excepcionalidad.

Nuestra Carta Magna –en su artículo 55– permite suspender total o parcialmente los derechos de información, difusión y opinión regulados en su artículo 20, siempre que se den situaciones extraordinarias como son los estados de anormalidad constitucional, y en particular cuando se produzcan las expresadas en su artículo 116 y desarrollados por la Ley Orgánica 4/1981, relativa a los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. En todos los casos y circunstancias descritas, excepto en el estado de sitio o en caso de guerra declarada, la Información/Comunicación Pública se encuentra sometida a ciertos principios que no suelen ser contemplados por los medios de comunicación. Requisitos que debe cumplir cualquier tipo de información emitida por el Estado como son: la veracidad, haber sido averada para poder certificar su veracidad, la garantía de información, la austeridad en el gasto, la transparencia, la eficiencia, la libre competencia e igualdad ante los beneficios públicos que puede proporcionar, la no discriminación, la utilidad, que esté desagregada, el interés general, la lealtad institucional hacia la ciudadanía, la responsabilidad en los efectos que produce, fácil comprensión, etc. (Ibañez, 2014, p 143).

Como primer dato a tener en cuenta, se debe destacar que el requisito de veracidad, posiblemente, fue incumplido por el Gobierno según ciertos medios de comunicación a través de noticias similares a esta: “El vídeo secreto que prueba que PSOE y Podemos veían serio riesgo de contagio en el 8M: «¡Que no se besa!»” (Puglisi, 2020a).

El Estado difunde una gran variedad de tipos de información como son: la información epidémica, la radiológica, la alimentaria, la sanitaria, la asistencial, la clínica y la de salud pública, la preventiva, la de emergencias, la institucional, la organizativa, la de planificación, la de relevancia jurídica, la económica, la presupuestaria, la estadística, etc. Dicho lo cual, para abordar este trabajo parece oportuno agruparlas en dos grandes bloques dependiendo de las circunstancias en

que se producen, a saber: la información en periodos de normalidad y la información derivada de situaciones extraordinarias. Aunque el tema que nos ocupa se centra en estas últimas, es necesario conocer el contexto legal en que se mueve la Información Pública en estos dos grandes bloques.

En la Administración General del Estado la gestión de la función informativa en periodos de normalidad corresponde a los entes concernidos emitiendo cada uno la Información Pública que le afecta. Independientemente de ello el titular del Ministerio de la Presidencia se constituye en el máximo responsable y coordinador interministerial en materia de información y comunicación, estando auxiliado por la Secretaría de Estado de Comunicación (Real Decreto 199, 2012, arts. 4 y 5).

Pero en lo relativo a situaciones extraordinarias de interés nacional resultantes de catástrofes, crisis o emergencias, la gestión de la Información Pública queda directamente en manos del director del Plan de la Emergencia correspondiente. Como norma general, esta responsabilidad suele recaer principalmente en personal los Ministerios del Interior (desde la Comisión Nacional de Protección Civil), en el de Defensa, o en el de Sanidad; para el caso en que se aplique la ley de Seguridad Nacional será la autoridad que ejerza de Portavoz del Gobierno, auxiliado por la Secretaría de Estado de Comunicación, quien gestione la política informativa para situaciones de crisis (Ley 36, 2015, Disposición adicional cuarta).

Instrumento modelador de la sociedad

Mediante las plataformas que ofrecen las nuevas tecnologías, desde las redes sociales y los medios de comunicación se puede fomentar el bien o el mal en la sociedad. Lo pueden hacer a través de mensajes destinados a promover o justificar el asesinato y el odio, o propugnando principios que fomenten la paz y la solidaridad. Para encontrar un ejemplo que ilustre esta afirmación no es menester recurrir a otros países o a tiempos remotos, el titular que a continuación se expone es lo suficientemente expresivo: “¿De la España nos roba, a la España nos mata?” (González, 2020a).

Así las cosas, tanto en el ámbito público como en el privado, es necesario que el proceso comunicacional se realice con respeto a ciertas normas éticas para que se autolegitime, no pudiendo llevarse a cabo de cualquier manera. Normas que no pueden ser otras que las que surgen y mantienen en el respeto al hombre mismo, es decir, al que es sujeto universal del derecho a la información, y que por lo tanto deben respetar de forma ineludible el derecho a la vida y el derecho a la integridad

física, psíquica y moral, pues son derechos prioritarios sobre la información.

En el Estado español la ingeniería social ha tenido en la Comunicación/Información Pública un excelente recurso para modificar o reforzar conductas en beneficio de la sociedad, un ejemplo de ello son las campañas realizadas sobre seguridad vial. Esta actividad no se debe confundir con la propaganda política que, utilizada pérfidamente, persigue influir, normalmente de forma espuria, en la opinión pública para manipularla con fines políticos.

La dualidad entre la naturaleza política y ejecutiva de la acción gubernamental debe mantenerse en esferas comunicativas separadas. La valoración, el juicio y la información de carácter político tienen sus propios cauces y no deben mezclarse con la actividad comunicativa que, ordenada y orientada a la difusión de un mensaje común, emprende la Administración para dar a conocer a los ciudadanos los servicios que presta y las actividades que desarrolla. Debe ser un principio fundamental de la actividad comunicativa del Gobierno, a través de campañas institucionales, desligar la opinión política de la información veraz y neutral sobre sus políticas públicas. La publicidad y comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes, y no deben perseguir objetivos inadecuados al buen uso de los fondos públicos (Ley 29, 2005, Exposición de motivos).

Para el Estado, el uso de la comunicación/información ha sido es y será una obligada, efectiva e imprescindible correa de transmisión de mensajes e ideas en beneficio de la sociedad a la que no puede dar la espalda. Tanto la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015 en su artículo 10.5, como la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 5, instan a la Administración la puesta en práctica de “planes de acción intersocial”, “campañas de sensibilización” o “acciones y planes que tengan por objeto aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad”. Para regular el ejercicio de esta peculiar actividad en 2005 se había promulgado la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional con el objeto de establecer y promover Campañas institucionales de publicidad y comunicación cuando concurran razones de interés público respetando el de interés general, la lealtad institucional, la veracidad, y la transparencia. Con esta ley se pretendía erradicar aquellas campañas que persiguiesen ensalzar la labor del Gobierno garantizando que sirvan a sus legítimos destinatarios, los ciudadanos, y no a quien las promueve.

Únicamente existen diez objetivos por los que se podrán promover o contratar estas campañas de comunicación. En lo relacionado con las situaciones de crisis o emergencias, hay uno con el que se pretende: “Advertir a la adopción de medidas de orden o seguridad públicas cuando afecten a una pluralidad de destinatarios”. En este objetivo, se puede afirmar que no se ha efectuado ningún gasto desde que se publicó esta ley en 2005. Tampoco se ha llevado a cabo ninguna campaña en los ámbitos de la Seguridad Nacional ni la Protección Civil. Una de las pocas campañas –si no la única– emitida en este campo es la realizada por el Ministerio del Interior en 2017 –después de padecer más de cuarenta años de terrorismo– con el título: “Cómo actuar en caso de atentado”. (Ortega, 2017).

Un bien público que debe gestionar la Administración adecuadamente

La industria de la comunicación se mueve en el mercado de la oferta de ideas y contenidos de carácter informativo, persuasivo, o de entretenimiento, para atender a la demanda de todo tipo de públicos y sectores sociales mediante cualquier soporte comunicacional: audiovisual, multimedia, papel, etc. Las características primordiales que sustentan este modelo de industria son las siguientes: la necesidad de ser rentable, responder a los intereses de sus empresarios (bien sean de carácter político, comercial, social, religioso, etc.), y ejercer la actividad desde la mínima exposición al riesgo de su capital social. En este sentido la frase: “Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi Cebrián”, en el contexto del artículo en que se publicó, es lo suficientemente clarificadora de este punto: “Mariano Rajoy, nuevo editor de *El País*” (Ramírez, 2017).

En coyunturas de carácter extraordinario o que amenacen gravemente la integridad física de las personas, la Administración debe convertirse en la mejor y más fiable fuente de información, gestionando y difundiendo este bien público con arreglo a lo que determina la Ley, entre otros motivos, por ser generadora de grandes beneficios. Asunto decisivo para el ejercicio del periodismo al ser la principal suministradora de “la materia prima” para la “industria de la comunicación”, sin dejar de dar cumplimiento a los principios marcados en la ya referida “Publicidad activa”. Tampoco debe pasar desapercibido que el Estado es el principal cliente de las empresas de este sector, hasta el punto de que si no fuese por el gasto que hace el Estado en la industria de la comunicación la mayor parte de medios de comunicación

no existirían, un documento aclaratorio del asunto es el artículo titulado: “Publicidad institucional. Moneda de cambio que mantiene artificialmente con vida a la prensa tradicional” (PuroMarketing, 2017).

La evolución del montante económico del gasto en publicidad por parte de la Administración General del Estado se puede seguir en la Figura 1. También conviene señalar que las inversiones en publicidad por parte de las Administraciones Locales y Autonómicas superan a las que hace la Administración Central. Pero, al margen de estos escalones administrativos, hay que decir que las cifras se disparan en el gasto que hacen en publicidad las empresas dependientes del Estado en sus tres escalones administrativos, cifras que se procuran silenciar a la opinión pública. Es conocido, por ejemplo, el escándalo producido por la decisión del Gobierno de hacer de forma extraordinaria un gasto publicitario innecesario en plena crisis económica para favorecer a medios de comunicación afines; hecho que salió a la luz pública a través de algunos medios de comunicación con titulares como: “Moncloa activará 100 millones de euros en publicidad institucional para los medios. Pedro Sánchez ultima el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2020 y subvenciones de hasta el 30% a los anunciantes en medios” (Cano, 2020) (Figura 1).

Teniendo en cuenta que las tres formas de actividad publicitaria en la Administración son la publicidad institucional, la publicidad administrativa y la publicidad de la actividad económica (Tribunal de Cuentas, 2011, informe 904 punto 4), queda manifiestamente claro que el cuadro expuesto no refleja la totalidad del gasto, pero se trae a colación como una pequeña muestra desde la que se puede vislumbrar el alcance económico del asunto.

El Tribunal de cuentas, en sus informes de fiscalización sobre los contratos de publicidad y comunicación institucional, pone al descubierto gran número de irregularidades que podrían ser catalogadas, en algunos casos, como delictivas y advierte de que no debe usar la publicidad institucional como instrumento de propaganda política (Como se cita en Europa Press, 2014). Lo cual saca a la luz el poco celo demostrado por los distintos responsables políticos a la hora de contratar este tipo de servicios; aunque dadas las consecuencias derivadas de ello, más parece haberse consentido a propósito tan mala gestión con la finalidad de obtener algún tipo de provecho de las empresas beneficiadas con tales irregularidades: “La prensa catalana se frota las manos ante el aumento de las subvenciones” (EDeconomíaDigital, 2017).

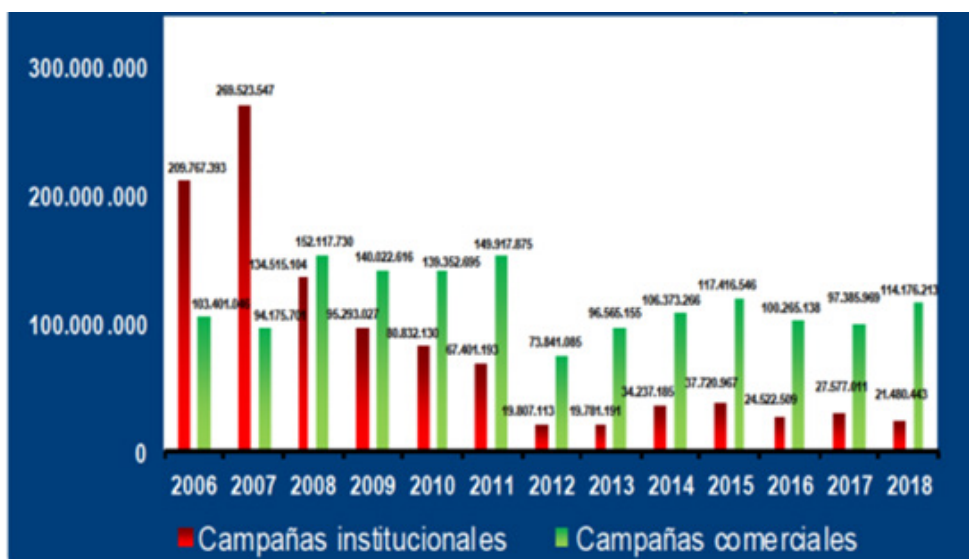


Figura 1. Inversiones de la Administración Central en Campañas institucionales y comerciales entre los años 2006 y 2018 (en €). Fuente: Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional

La contratación de este tipo de servicios con la industria privada tiene una larga tradición. Pero toda la clase política de los diferentes Gobiernos e Instituciones que gestionan estos fondos, en muchos casos con empresas afines, ha prescindido del personal funcionario cualificado en estas labores dejándolas en manos de personas de su confianza que se transforman en “repartidores de subvenciones”. Esta adjetivación ha sido acuñada, principalmente, por profesionales del periodismo que se sienten discriminados por las distintas Administraciones: “El repartidor de subvenciones a la prensa catalana, Oriol Soler, formó parte del máximo órgano golpista” (Cuesta, 2018).

Todo lo cual lleva a pensar que el gasto público empleado en la actividad publicitaria, por parte del Estado, es comparable a los tradicionales “fondos de reptiles”, término que, alentado por los mismos profesionales de la información, se encuentra plenamente vigente. Por lo ilustrativo, se remite al lector al artículo titulado: “¿Publicidad institucional o fondo de reptiles?” (Pachón y Cándano, 2016). Fondo con el que, directa o indirectamente, se premia y paga a muchos profesionales de la comunicación transformándolos en “mercenarios mediáticos”, epíteto que también se ha acuñado desde el ámbito de los mismos medios de comunicación, sirva de ejemplo el siguiente artículo: “El escandaloso gasto público en mercenarios mediáticos” (Bellaco, 2016).

La arbitrariedad es tan palpable que los mismos medios de comunicación hablan de “reparto de publicidad”, en lugar de contratación de servicios de publicidad por el Estado. El término es inadecuado, cuando no despectivo y viciado, al ser empleado por los mismos medios de

comunicación en lugar de los determinados por algunos de los requisitos legales ya aludidos: la libre competencia e igualdad ante los beneficios públicos que puede proporcionar, la no discriminación, etc. Prueba de ello es el siguiente artículo: “Carmena castiga a la ‘prensa enemiga’ con su reparto de publicidad: *Abc* y *La Razón*, en mínimos” (Arranz, 2017).

Otro dato que revela los intereses espurios buscados mediante este tipo de “Gastos de inversiones de carácter inmaterial” es que los distintos políticos responsables de la contratación de publicidad institucional suelen escudar se, sin el menor rubor, en que son las llamadas Centrales de Medios –empresas intermediarias– las responsables de la distribución del montante económico de los contratos de publicidad institucional; con ello tratan de enmascarar las irregularidades que se vienen relatando. Pero lo cierto es que el Tribunal de Cuentas dice que, como norma, son las Administraciones las que deben contratar directamente con los medios de comunicación, evitando hacerlo con las aludidas Centrales de Medios.

En relación con los contratos de mediación para las inserciones publicitarias en los medios impresos y audiovisuales, a cambio de un porcentaje de comisión, se considera la necesidad de un informe valorativo previo tanto de la carencia de recursos personales en el Ayuntamiento para la gestión directa con tales medios de las inserciones, como de la mejora económica que tal mediación implica respecto a las tarifas ofrecidas por los medios directamente al Ayuntamiento. Dicha valoración previa resulta especialmente exigible cuando los Ayuntamientos integran en su organigrama municipal

servicios o gabinetes de prensa con competencia propia en actuaciones de publicidad institucional (Tribunal de Cuentas Informe nº 904, 2011, p. 62).

Pero no solamente desde la publicidad institucional se puede tildar a la Administración de fatora al no respetar lo marcado en la Ley por causa de la concesión de subvenciones económicas, no se debe perder de vista la “subvención” encubierta que supone dar entrevistas de forma arbitraria por parte de determinadas Autoridades a unas empresas de comunicación excluyendo a otras pues, como ya se ha dicho, con ello se fomenta la discriminación incumpliendo, entre otros, los principios de libre competencia e igualdad². Estos hechos producen mayor rechazo y aversión si se tiene en cuenta la gran cantidad de medios de comunicación de carácter público que dispone el Estado –entre los que se incluye la agencia EFE– para difundir la información que sea precisa sobre algún tema de actualidad; con ello se daría cumplimiento al principio legal de austeridad en el gasto.

De esta forma, con estos ejemplos, se corrobora que la posibilidad de que una empresa de comunicación pueda contar con la presencia de ciertas Autoridades en sus medios de comunicación, se convierte en un instrumento de poder en manos de los intereses de los políticos de turno a los que las empresas de comunicación, más pronto que tarde, les obligaran a pagar el peaje correspondiente.

La cuestión es tan turbia y alcanza tal magnitud que resulta conveniente no incidir ni profundizar más en este aspecto dado que no es uno de los objetivos de este trabajo³. Pero lo más importante es que todo lo dicho hasta aquí no ha pasado desapercibido entre el gran público, pues el Centro de Investigaciones Sociológicas ya en 2011 –en su estudio nº 2905– constataba que el 50% de la población creía que entre los medios de comunicación la corrupción estaba “muy extendida” o “bastante extendida”, por detrás de “la construcción”, “la concesión de obras públicas” y “la concesión de subvenciones”.

Segunda parte: La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19

Forma de abordar el caso en sus dos fases

Tras poner a prueba la paciencia del sufrido lector con el monótono periplo hecho sobre los atributos legales que caracterizan a la Información Pública en situaciones de normalidad, nos encontramos en condiciones de

² Un claro ejemplo de esta arbitrariedad es la realizada por Fernando Simón –un funcionario público– al conceder de forma arbitraria una entrevista a un medio de comunicación privado: “El día que Fernando Simón afirmó en La Sexta que España estaba preparada para detectar, combatir y fabricar vacunas contra el COVID-19” (Puglisi, 2020d).

³ De cualquier forma, para ilustrar la opinión de lectores poco avezados en estas lides, no parece ocioso traer a escrutinio el parecer de un periodista como es Ignacio Escolar en uno de sus artículos titulado: “Comprar medios y periodistas con el dinero público” (Escolar, 2017).

abordar y analizar la esencia, naturaleza y empleo de la Información/Comunicación Pública en la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

Lo primero que se debe tener presente es que ante cualquier posible emergencia, como la que nos ocupa, la ley del Sistema Nacional de Protección Civil determina que debe existir un Plan de protección civil para dar respuesta a la emergencia en cuestión. Este plan debe incluir su correspondiente Plan de comunicación de emergencia ad hoc en el que se fije la composición del equipo de atención Informativa a los Medios de Comunicación, así como los oportunos programas de información preventiva y de alerta.

Los Planes de Protección Civil son los instrumentos de previsión del marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia, así como del esquema de coordinación de las distintas Administraciones Públicas llamadas a intervenir. (...) deberán contener programas de información y comunicación preventiva y de alerta que permitan a los ciudadanos adoptar las medidas oportunas para la salvaguarda de personas y bienes, facilitar en todo cuanto sea posible la rápida actuación de los servicios de intervención, y restablecer la normalidad rápidamente después de cualquier emergencia. (...). El Plan Estatal General desarrolla la organización y los procedimientos de actuación de la Administración General del Estado para prestar apoyo y asistencia a las otras Administraciones Públicas, en casos de emergencia de protección civil⁴, así como ejercer la dirección y coordinación del conjunto de las Administraciones Públicas en las emergencias declaradas de interés nacional. La aprobación del Plan Estatal General corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior (Ley 17, 2015, arts. 14.1, 10.3, 15.1).

De esta forma, en la emergencia sanitaria del coronavirus, independientemente de haberse decretado el estado de alarma, se debería haber activado el correspondiente Plan Estatal General ante el Riesgo de Crisis Sanitarias (tales como epidemias y situaciones de contaminación graves), pues ambos se complementan mutuamente y la legalidad lo contempla. Aunque desde 2015 estaba fijada su creación, debiéndose haber aprobado en tiempo y forma, las pesquisas realizadas tratando de

⁴ Emergencia de protección civil. Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Se corresponde con otras denominaciones como emergencia extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva. Catástrofe. Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad”. (Ley 17, 2015, art. 2.5 y 2.6).

obtener información de su existencia no han tenido resultado positivo y todo apunta a que este plan no estaba aprobado, muy probablemente por no haberse confeccionado.

El COVID-19, en su aspecto informativo, se ha desarrollado en España en dos fases claramente diferenciadas, primero una crisis comunicacional y después una emergencia sanitaria. La crisis comunicacional tuvo lugar con anterioridad al 14 de marzo, fecha en que se decretó el estado de alarma. En cada una de las fases, como ya se ha apuntado, la autoridad responsable de dar la respuesta a la situación es también la responsable de gestionar la Información Pública.

Autoridad gestora de la función pública de informar en cada fase

La primera fase comenzó en el mes de enero, durante la cual el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dependiente de la Dirección General de Salud Pública –Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social–, era el organismo responsable del seguimiento –y solo del seguimiento técnico, no del periodístico– de la posible emergencia en coordinación con el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil (Ministerio del Interior) que es el responsable de la detección, seguimiento y previsión de amenazas de cualquier peligro inminente para las personas y bienes. Lo que quiere decir que la máxima autoridad responsable de la actividad informativa –de la Información Pública– era el ministro de Sanidad, auxiliado por el personal cualificado del que dispone en su gabinete de comunicación.

En la segunda fase el mando único, consecuencia de la declaración del estado de alarma, “la superior dirección” recayó en el presidente del Gobierno el cual, según se dispone en el artículo 4 del Real Decreto 436/2020, delegaba en los titulares de sus respectivas áreas de responsabilidad: la ministra de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el Ministro de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Esta decisión, en la práctica, supuso que cada uno de los ministerios implicados se responsabilizasen de la Información Pública que les concernía, rompiendo la disciplina comunicacional que se debe ejercer desde el mando único y por ello también se difuminó la responsabilidad en la labor informativa –que debía haber correspondido al Ministerio de la Presidencia–, lo cual provocó una gran saturación de comparecencias y ruedas de prensa diarias tanto de los titulares ministeriales como del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus: 106 entre marzo y abril. A ello hay que sumarle que: el Presidente del Gobierno daba continuas ruedas de prensa en sus numerosas comparecencias; que la ministra de la Presidencia –encargada de coordinar la

función pública de informar entre todos los Ministerios– enfermó; que el resto de titulares de los diecisiete ministerios –pertenecientes a dos partidos políticos distintos– hacían las declaraciones que estimaban convenientes a los medios de comunicación, siendo a menudo contradictorias⁵; que la epidemia adquiría unas dimensiones sociales desconocidas; y que la contratación de productos sanitarios para dar respuesta a la crisis parece ser que no se ajustaba a la ortodoxia legal. En este estado de cosas se puede afirmar que el caos comunicacional estaba servido. La situación empezó a remitir cuando el 26 de abril se suprimieron las comparecencias diarias del Comité Técnico y se restringieron las de los ministros. No obstante, el mal ya estaba hecho.

Las portavocías

Durante la primera fase, al ser el Ministerio de Sanidad el responsable de generar la información Pública, el portavoz debiera haber sido su titular auxiliado en sus comparecencias por una persona cualificada en habilidades comunicativas. Por ejemplo, la directora de Comunicación, del Ministerio de Sanidad, cargo de confianza elegido por el ministro Illa, la cual, hasta la fecha, ha pasado como una auténtica desconocida entre la opinión pública. Pero debido al apagón informativo habido durante esta fase, tanto uno como otro pasaron desapercibidos endosando la función pública de informar al director del CAES, de ello se hablará después.

Durante la segunda fase se produjo una gran vulnerabilidad para la adecuada gestión comunicacional al utilizar diversos portavoces pertenecientes a las instituciones implicadas en el Comité Técnico. A esto se le unió algunas declaraciones desafortunadas de la ministra portavoz del Gobierno y las espontáneas intervenciones públicas del vicepresidente segundo del Gobierno que, junto con los ministros de su formación política, consiguieron enturbiar frecuentemente la información que debía recibir la población. A este respecto, un acontecimiento que no es calificable de anecdótico, por las veces que se repitió, fue el protagonizado por el vicepresidente el Gobierno y difundido en la prensa con titulares como este: “Iglesias se cuelga la medalla y anuncia antes que Illa la rectificación para los paseos de los niños” (Puglisi, 2020e).

Con respecto a los portavoces del Comité Técnico, por el resultado demostrado durante sus intervenciones, hay que resaltar que ninguno de ellos estaba cualificado para desempeñar labores comunicacionales. Y si al comienzo de las ruedas de prensa los uniformados ofrecieron una imagen de rigor, seriedad, y respeto

⁵ El asunto llegó a tal punto que algún medio de comunicación lo sacó a la luz pública con titulares como: “Caos en Moncloa: Ábalos e Illa mandan a ‘callar’ a Montero por poner fecha al final del estado de alarma” (Puglisi, 2020c).

ante la trágica situación, pronto se observó que se limitaban a dar una serie de datos de poca sustancia más propios de ser difundidos a través de la página web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social o, como se suele hacer en el Ministerio de Defensa, por un Oficial de Comunicación especializado en estas lides y no por autoridades con la relevancia del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, un teniente general de la Guardia Civil, o un comisario principal perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía. Los datos que ofrecían podían calificarse en términos militares como un “punto de situación” con el cual se daban a conocer las actividades realizadas el día anterior. Quizá debido a estas circunstancias más de un portavoz, a preguntas de los periodistas, dio a conocer algún dato que al parecer destapaban actuaciones poco confesables del Gobierno, como las realizadas por el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil que produjeron la desaparición de este tipo de portavoces: “Sánchez se carga a los uniformados de las ruedas de prensa tras el escándalo con el general de la Guardia Civil” (González, 2020b).

A todo ello se debe añadir que en esta segunda fase, la persona que debía haber liderado la comparecencia era la directora general de Salud Pública en lugar del director del CCAES pues este funcionario, ni tenía el rango que el resto de los comparecientes, ni su puesto de trabajo está relacionado con la Información Pública. Para mayor abundamiento, legalmente, el desempeño de sus funciones se limita al campo de la comunicación y transmisión de datos sanitarios, solo entre los estamentos oficiales implicados, que posibiliten una ágil acción de Mando y Control en la respuesta a las posibles crisis, así como a la elaboración y desarrollo de los planes de preparación y respuesta para hacer frente a las amenazas de salud pública, planes que, según parece, no existían o no se pusieron en práctica. De esta forma, y solo en caso de necesidad, la actividad de este funcionario en el trato con los medios de comunicación social se podría limitar únicamente a cuestiones relacionadas con las actividades que desempeña en su puesto de trabajo – información técnica–, no a dar opiniones personales sobre otros temas a los medios de comunicación social, y menos ofrecer ruedas de prensa que se salgan de su esfera profesional ante una emergencia sanitaria⁶, actitud que sí observó pulcramente en sus intervenciones durante la crisis del virus del Ébola (Ibáñez, 2017).

Parámetros objetivos para el análisis y valoración comunicacional

Debido a la extensión predeterminada a que se debe ajustar este trabajo es imposible analizar de forma exhaustiva los parámetros que este autor utilizó en los

⁶ La actitud política de este portavoz fue calificada por algunos medios como afín al Gobierno de la siguiente forma: “Fernando Simón, el otro clan de la ceja” (Benito, 2020).

trabajos aludidos como referencia de este. Tampoco se puede realizar un análisis pormenorizado de los datos que se van a exponer, ya que el tramo de tiempo estudiado es de los cuatro primeros meses del año 2020, y la emergencia sanitaria perdura bajo las limitaciones del estado de alarma en las fechas en que se está elaborando. Por todo ello, a continuación se va a presentar un conjunto de datos que, a modo de flash, puedan orientar al lector desde parámetros objetivos.

Respecto a la actividad informativa del Gobierno. A nivel cuantitativo, entre el 10 de marzo y 30 de abril, el Gobierno dio 118 ruedas de prensa relativas al Coronavirus (4 en enero, 8 en febrero, 37 en marzo y 69 en abril). Por otra parte, el Ministerio de Sanidad emitió 115 notas de prensa entre el 10 de enero y el 30 de abril, de ellas 96 estaban relacionadas con el coronavirus (Figura 2).

Como aspectos cualitativos, en un primer momento las entrevistas se hicieron sin presencia de periodistas, los cuales remitían anticipadamente a la Secretaría de Estado de Comunicación las preguntas que deseaban hacer; preguntas que eran seleccionadas y formuladas personalmente por su titular. Esta forma de entrevista provocó la repulsa de gran cantidad medios de comunicación al censurarse la libertad de expresión, pues con este sistema se ofrecía una imagen de la gestión del Gobierno que no se correspondía con la realidad esquivando los temas más espinosos, para no poner en tela de juicio la actuación gubernamental. Posteriormente el formato se cambió, pudiéndose hacer las preguntas en directo por los periodistas mediante videoconferencia. Pero el método empleado seguía viciado pues el secretario de Estado de Comunicación era quien decidía qué medio de comunicación era el elegido para intervenir en las entrevistas.

Todo esto, unido a que los temas propuestos en las preguntas eran algo superficiales o más bien anecdóticos, y que los intervinientes eran tan favorables a la actitud del Gobierno –alejada de la legalidad vigente en este asunto–, motivó un manifiesto firmado por más de 500 periodistas de medios como: La Sexta, la Ser, *El País* o *EIDiario.es*.

Respecto a las noticias publicadas por la agencia de noticias EUROPA PRESS. A nivel cuantitativo, en su momento hubo noticias de gran calado mediático que no se recogieron por ciertos grupos de comunicación devaluando principios como: el de la lealtad informativa hacia la ciudadanía, la transparencia informativa, y la utilidad o la imparcialidad al privar a la ciudadanía del conocimiento de ciertos datos de gran trascendencia para la seguridad de las personas⁷. Esta disparidad de actitud y criterio editorial se agrupó en torno dos tendencias claras: los agresivamente críticos con la

⁷ Una de las noticias que más se trató de ocultar por los medios de comunicación afines al Gobierno fue la relativa a los féretros y cadáveres víctimas de la pandemia: “Las imágenes que Sánchez no quiere que veas: cadáveres hacinados en los pasillos de los hospitales de Madrid” (Periodista Digital, 2020b).

gestión gubernamental y los complacientes cuasi encubridores de la realidad social, cuando no conniventes con la política gubernamental y las negligencias ocurridas. Como a lo largo de este trabajo se han ido aportando suficientes muestras de la actividad periodística de los primeros, los críticos, se ha estimado conveniente tomar como referencia de los medios de comunicación incluidos en el segundo grupo a la agencia de noticias EUROPA PRESS, por no depender del Estado, en lugar de la agencia EFE, que sí lo es.

Desde el día 11 de enero hasta el 30 de abril, EUROPA PRESS emitió 47.752 noticias relacionadas con el coronavirus. Por su elevado número aún no se ha podido cuantificar y evaluar con precisión el contenido de cada una de ellas, pero se estima que menos de un 30% estaban relacionadas con las personas afectadas por la enfermedad en España. En la Figura 3 se puede

observar que con anterioridad al 8-M el número de noticias publicadas sobre el coronavirus que afectaban a todo el orbe era tan bajo respecto a los días posteriores, que permite sospechar de la parcialidad y connivencia de esta agencia con la política gubernamental en esta fase de la crisis.

Como aspectos cualitativos, a la espera de precisar con rigor y exactitud estos datos relativos al coronavirus, si se hace una comparación grosso modo con las noticias publicadas por EUROPA PRESS durante la crisis del virus del Ébola, se observa que durante los cuatro meses que duró aquella crisis, entre el 1 de agosto y el 5 de noviembre de 2014, de las 6.126 noticias que emitió, 4.284 (un 70%) eran relativas a España. Esto puede dar a entender cierto grado de opacidad y autocensura de este medio de comunicación en la crisis del COVID-19.

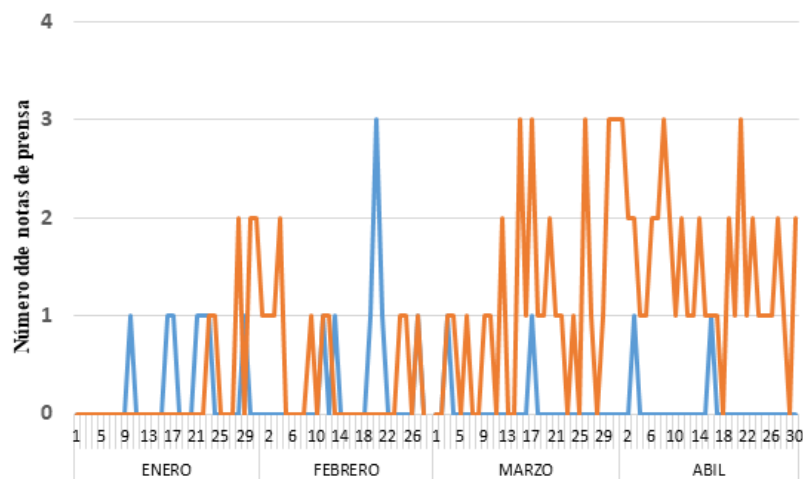


Figura 2. Notas de prensa emitidas por el Ministerio de Sanidad entre el 10 de enero y el 30 de abril. Fuente: Elaboración propia

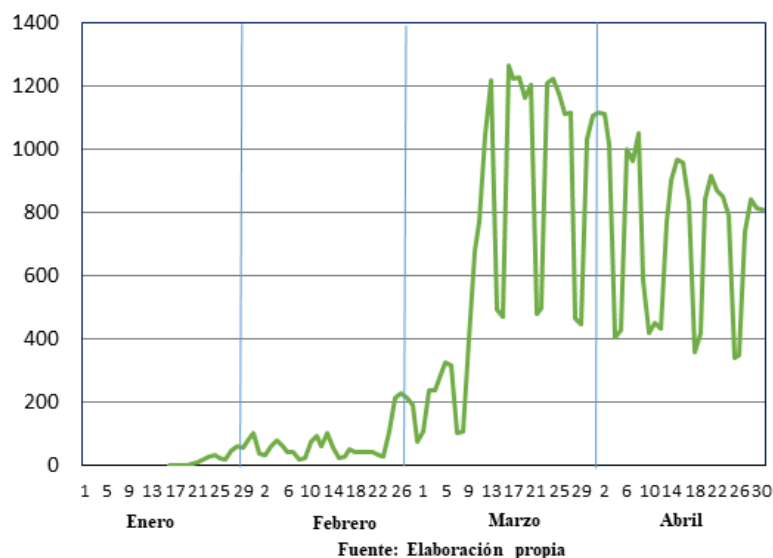


Figura 3. Noticias publicadas por la agencia EUROPA PRESS entre el 11 de enero y el 30 de abril sobre el coronavirus. Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Con la esperanza de haber conseguido al menos el objetivo secundario (dar a conocer al lector el soporte técnico imprescindible para sacar sus propias conclusiones en esta emergencia sanitaria) se va a proceder al análisis de la gestión de la función pública de informar por parte del Gobierno, objetivo principal de este trabajo.

El primer aspecto es el derivado de la legislación. Ya se ha visto que en España está perfectamente regulada la forma de gestionar la información a la población en situaciones de normalidad, legislación que no se observó con pulcritud durante la primera fase. También, para el caso de que se pueda producir una situación extraordinaria, se tiene previsto la existencia –y ejecución en su caso– de los correspondientes Planes de Emergencia, dotados de un Plan de Comunicación ad hoc para gestionar su actividad informativa. Pero el Gobierno, muy probablemente por desconocimiento, en la segunda fase lejos de aplicar lo determinado en las normas y planes escritos para gestionar la función informativa, optó por aplicar las directrices de sus asesores produciendo un caos informativo que se transformó en una crisis comunicacional que hasta la fecha no ha podido resolver.

Tampoco es baladí para este análisis la calidad y la gestión de la Información Pública divulgada por el Gobierno. Ya se ha visto que la Administración está obligada a difundir “de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”; cosa que no se ha observado con el rigor que merece una situación como esta al hurtarle a la población datos que la Ley obliga a hacer públicos. También ha quedado patente que la Administración está obligada a informar a la ciudadanía sobre los riesgos colectivos importantes que le afecten, obligación que ha infringido el Gobierno en ambas fases al poner en conocimiento de una parte de la población el peligro que se avecinaba al tiempo que se lo ocultaba al resto⁸. De esta postura gubernamental, a primera vista, podrían derivarse cierto tipo de responsabilidades al no divulgar en tiempo y forma la correspondiente “comunicación preventiva y de alerta” según se dispone en la Ley –con la finalidad de aumentar la resiliencia de la población–, poniendo así en peligro su seguridad y se atenta contra la vida de las personas en general, y del personal sanitario en particular. Debido a las demandas interpuesta ante la Justicia por los

⁸ Un dato más que chocante es el denunciado ante la opinión pública por cierta parte de la prensa mediante titulares como este: “El Gobierno socialcomunista alertó de la ‘peste china’ a su personal antes de avisar a la población” (Periodista Digital, 2020a).

colectivos afectados, se puede afirmar que titulares como el que sigue no carecían de fundamento: “Un documento oficial y el silencio nervioso de Illa: las pruebas definitivas de que el Gobierno conocía el peligro de celebrar el 8M” (Puglisi, 2020b).

En este análisis no se puede obviar el componente económico y las implicaciones que produce este bien perteneciente al pueblo. La Información Pública no solo produce beneficios honestos, utilizada espuriamente por ciertos medios de comunicación vasallos de las aportaciones económicas de un Gobierno puede conseguir –mediante la ingeniería social y la llamada “opinión publicada”– que se refuerce la acción gubernamental o sea vituperada. Cosa que ha ocurrido claramente en esta emergencia sanitaria entre los medios de comunicación receptores de subvenciones del Gobierno tratando de crear una opinión pública favorable al Ejecutivo, y el grupo de medios de comunicación “olvidados” por el Gobierno que se han convertido en los “paladines” de la libertad de expresión y comunicación. Es de esperar que con el tiempo salga a la luz pública qué medios de comunicación han pertenecido a un bando o a otro, aunque por las ayudas económicas que ya se han dado a conocer no parece complicado saber quiénes son unos y otros.

De forma resumida, se puede afirmar con poco margen de error que el Gobierno incumplió sus obligaciones legales en el desempeño de la función pública de informar, sobre todo por no respetar entre otros los principios legales de: veracidad, la austeridad en el gasto, la transparencia, la libre competencia e igualdad ante los beneficios públicos que puede proporcionar, la no discriminación, la utilidad, el interés general, la lealtad institucional hacia la ciudadanía, fácil comprensión, o la responsabilidad en los efectos que produce⁹.

Pero lo más punible es que el Ejecutivo no siguió ningún Plan de Comunicación ante la emergencia sanitaria. Quizá sea debido, como el mismo Gobierno ha dado a conocer, a que tampoco puso en práctica el correspondiente Plan Estatal General correspondiente, o lo que es peor: que no estuviese previsto ni uno, ni otro. El tiempo y –probablemente– los tribunales de Justicia, nos darán a conocer estas dudas sobre la gestión de la Información Pública durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

⁹ A este respecto, mientras ve la luz este artículo, el portavoz del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha sido llevado a los Tribunales de Justicia por ciertas opiniones hechas en público en el ejercicio de sus funciones: “Fernando Simón: «Si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8-M le diré que haga lo que quiera». *ABC* (Stegmann, 2020).

Referencias bibliográficas

- Arranz, R. (2017, 1 de agosto). Carmena castiga a la 'prensa enemiga' con su reparto de publicidad: *Abc y La Razón*, en mínimos. *Vozpópuli*. Recuperado de: <http://www.elmundo.es/grafico/espana/2014/09/08/53db717bca4741781c8b4577.html>
- Bellaco, D. (2016, 8 de diciembre). El escandaloso gasto público en mercenarios mediáticos. *Digital Sevilla*. Recuperado de: <https://www.digitalsevilla.com/2016/12/08/escandaloso-gasto-publico-mercenarios-mediaticos/>
- Benito, M. (2020, 25 de abril). Fernando Simón, el otro clan de la ceja. *La Razón*. Recuperado de: <https://www.larazon.es/gente/20200425/mika5l5brjel3bzqvhfr4buiibe.html>
- Cano, F. (2027, 7 de abril). Moncloa activará 100 millones de euros en publicidad institucional para los medios. *El Español*. Recuperado de: https://www.lespanol.com/invertia/medios/20200407/moncloa-activara-millones-euros-publicidad-institucional-medios/480452802_0.html
- Centro de Investigaciones Sociológicas. (2011). Estudio nº 2905, *Barómetro de junio*. Recuperado de: http://www.cis.es/cis/open/cm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=11424
- Cuesta, C. (2018, 1 de enero). El repartidor de subvenciones a la prensa catalana, Oriol Soler, formó parte del máximo órgano golpista. *OKDIARIO*. Recuperado de: <https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/01/01/repartidor-subvenciones-prensa-catalana-oriol-soler-formo-parte-del-maximo-organo-golpista-1649524>
- Dirección General de Protección Civil y Emergencias. (2008). *La dirección general de protección civil y emergencias*. Recuperado de: <http://www.proteccioncivil.es/documents/20486/156778/La+Dir+ecci%C3%B3n+General+de+Protecci%C3%B3n+Civil+y+Emergencias.pdf/b7e4bdf-74a4-4433-adb0-6fe4a97d927c>
- EDeconomíaDigital. (2017). *La prensa catalana se frota las manos ante el aumento de las subvenciones*. Recuperado de: https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/subvenciones-prensa-2017_402657_102.html
- Escolar, I. (2017, 5 de junio). Comprar medios y periodistas con el dinero público. *el diario.es*. Recuperado de: http://www.eldiario.es/escolar/Comprar-medios-periodistas-dinero-publico_6_651344889.html
- EUROPA PRESS. (2014, 8 de abril). *Tribunal de Cuentas insta a las Administraciones Públicas a adoptar medidas para mejorar la adjudicación de contratos*. Recuperado de: <https://www.europapress.es/nacional/noticia-tribunal-cuentas-Insta-administraciones-publicas-adoptar-medidas-mejorar-adjudicacion-contratos-20140408164553.html>
- Federal Emergency Management Agency. (2010). Introducción al Sistema de Comando de Incidentes (ICS 100). *Manual del estudiante*. Recuperado de: http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/212/1/ics_-_introduccion_al_sistema_de_comandos_de_incidentes_-_m.e..pdf
- González, Q. (2020, 19 de marzo). ¿De la España nos roba, a la España nos mata?. *Nuevatribuna.es*. Recuperado de: <https://www.nuevatribuna.es/opinion/quim-gonzalez-muntadas/espana-nos-roba-espana-nos-mata/20200319110154172296.html>
- González, F. (2020, 25 de abril). Sánchez se carga a los uniformados de las ruedas de prensa tras el escándalo con el general de la Guardia Civil. *OKDIARIO*. Recuperado de: <https://okdiario.com/espana/sanchez-carga-uniformados-ruedas-prensa-escandalo-general-guardia-civil-5513204>
- Ibáñez, A. (2014). *Comunicación, Administraciones Públicas y gestión de crisis y emergencias* (Tesis doctoral, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid). Recuperado de <https://eprints.ucm.es/29450/1/T35948.pdf>
- Ibáñez, A. (2017). *La crisis del virus del Ébola en España y la gestión de la información Pública ante situaciones extraordinarias relacionadas con la salud*. Laguna, España: Sociedad Latina de Comunicación Social. Recuperado de <http://www.cuadernosartesanos.org/2017/cac133.pdf>
- Ibáñez, A. (2019). La Administración y la cobertura informativa en situaciones extraordinarias relacionadas con la salud. La crisis del virus del Ébola. *Revista Española de Comunicación en Salud*, [S.l.], p. 67-79. doi:<http://dx.doi.org/10.20318/recs.2019.4425>.
- Ley 41/2002, de 14 de noviembre de 2002. Jefatura del Estado. *BOE*, 274. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188>

- Ley 29/2005, de 29 de diciembre de 2005. Jefatura del Estado. *BOE*, 312. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-21524-consolidado.pdf>
- Ley 33/2011, de 4 de octubre de 2011. Jefatura del Estado. *BOE*, 240. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623>
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre de 2013. Jefatura del Estado. *BOE*, 295. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887>
- Ley 17/2015, de 9 de julio de 2015. Jefatura del Estado. *BOE*, 164. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7730>
- Ley 36/2015, de 28 de septiembre de 2015. Jefatura del Estado. *BOE*, 233. Recuperado de: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10389
- Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio de 1981. Jefatura del Estado. *BOE*, 134. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774>
- Mayo, M. (2019). Uso de las redes sociales en la cobertura periodística de crisis, desastres y emergencias en España. *Revista Española de Comunicación en Salud*, [S.l.], p. 43-54. doi:<http://dx.doi.org/10.20318/recs.2019.4428>
- OKDIARIO. (2020, 8 de abril). *La UE reconoce que aceptó que China censurara un artículo sobre el origen del coronavirus*. Recuperado de: <https://okdiario.com/internacional/ue-reconoce-que-acepto-que-china-censurara-articulo-sobre-origen-del-coronavirus-5577395>
- Ortega, D. (2017, 26 de noviembre). Cómo actuar en caso de atentado. *El País*. Recuperado de: https://politica.elpais.com/politica/2017/12/18/actualidad/1513594892_397969.html
- Pachón, A. y Cándano, X. (2016, 28 de julio). ¿Publicidad institucional o fondo de reptiles? *Atlántica XXII*. Recuperado de: <http://www.atlanticaxxii.com/publicidad-institucional-fondo-reptiles/>
- Periodista Digital. (2020, 6 de abril). El Gobierno socialcomunista alertó de la 'peste china' a su personal antes de avisar a la población. *Periodista Digital*. Recuperado de: <https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/20200404/coronavirus-son-12-000-muertos-espana-gobierno-piensa-agradar-bilduerc-noticia-689404288591/>
- Periodista Digital. (2020, 8 de abril). *Las imágenes que Sánchez no quiere que veas: cadáveres hacinados en los pasillos de los hospitales de Madrid*. Recuperado de: <https://www.periodistadigital.com/periodismo/20200408/coronavirus-imagenes-sanchez-quiere-veas-cadaveres-hacinados-pasillos-hospitales-madrid-noticia-689404289310/>
- Puglisi, J. (2020, 1 de abril). El vídeo secreto que prueba que PSOE y Podemos veían serio riesgo de contagio en el 8M: «¡Que no se besa!». *Periodista Digital*. Recuperado de: <https://www.periodistadigital.com/politica/gobierno/20200401/nuevo-video-demuestra-psoe-veian-riesgo-contagio-8m-besa-noticia-689404288083/>
- Puglisi, J. (2020, 6 de abril). Un documento oficial y el silencio nervioso de Illa: las pruebas definitivas de que el Gobierno conocía el peligro de celebrar el 8M. *Periodista Digital*. Recuperado de: <https://www.periodistadigital.com/politica/justicia/20200406/documento-oficial-condena-psoe-prueba-definitiva-conocian-peligro-celebrar-8m-noticia-689404288813/>
- Puglisi, J. (2020, 8 de abril). Caos en Moncloa: "Ábalos e Illa mandan a 'callar' a Montero por poner fecha al final del estado de alarma". *Periodista Digital*. Recuperado de: <https://www.periodistadigital.com/politica/gobierno/20200408/caos-moncloa-abalos-e-illa-mandan-callar-montero-poner-fecha-final-alarma-noticia-689404289292/>
- Puglisi, J. (2020, 13 de abril). El día que Fernando Simón afirmó en la Sexta que España estaba preparada para detectar, combatir y fabricar vacunas contra el COVID-19. *Periodista Digital*. Recuperado de: <https://www.periodistadigital.com/television/20200413/dia-fernando-simon-afirmo-lasexta-espana-preparada-detectar-combatir-fabricar-vacunas-covid-19-noticia-689404290963/>
- Puglisi, J. (2020, 21 de abril). Iglesias se cuelga la medalla y anuncia antes que Illa la rectificación para los paseos de los niños. *OKDIARIO*. Recuperado de: <https://okdiario.com/espana/iglesias-cuelga-medalla-anuncia-antes-que-illa-rectificacion-permitir-paseos-ninos-5494024>
- PuroMarketing. (2017, 5 de junio). *Publicidad institucional: Moneda de cambio que mantiene artificialmente con vida a la prensa tradicional*. Recuperado de: <http://www.puromarketing.com>

com/9/28871/publicidad-institucional-moneda-cambio-mantiene-artificialmente-vida-prensa-tradicional.html

Ramírez, P. (2017, 26 de noviembre). Mariano Rajoy, nuevo editor de *El País. El Español*. Recuperado de: https://www.elespanol.com/opinion/carta-del-director/20171125/264923506_20.html

Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto de 1985. Ministerio del Interior. *BOE*, 191. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-16874&p=19850810&tn=6>

Real Decreto 407/1992, de 24 de abril de 1992. Ministerio del Interior. *BOE*, 105. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-9364>

Real Decreto 967/2002, de 20 de septiembre de 2002. Ministerio del Interior. *BOE*, 236. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-18971>

Real Decreto 199/2012, de 23 de enero de 2012. Ministerio de Administraciones Públicas. *BOE*, 20. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-1033>

Real Decreto 671/2014, de 1 de agosto de 2014. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. *BOE*, 187. Recuperado de: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8364

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. *BOE*, 67. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692>

Stegmann, J. (2020, 9 de marzo). Fernando Simón: «Si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8-M le diré que haga lo que quiera». *Abc*. Recuperado de: https://www.Abc.es/sociedad/Abci-fernando-simon-si-hijo-pregunta-si-puede-manifestacion-dire-haga-quiera-202003071154_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F).

Tribunal de Cuentas. (2011). *Informe 904*. Recuperado de: <https://www.tcu.es/repositorio/21cdfcd5-5acf-4fe5-a5c9-50a716070917/I904.pdf>